

Con todo, la situación era infinitamente más compleja, como el mismo gobierno y sus economistas se vieron forzados a cobrar conciencia, cuando, después de 1982, se volvió a entrar en una fase crítica. Debido a la apertura al exterior, la economía chilena se había vuelto aún más vulnerable a los vaivenes cíclicos de la economía internacional. El flujo de créditos externos significó un endeudamiento creciente, a corto plazo, el cual además fue manejado por un sector financiero inescrupuloso en su afán especulativo, que se aprovechaba de las altas tasas de interés que ofrecía el país. La mantención de un tipo de cambio fijo produjo gravísimos problemas en la balanza de pagos; el país se inundó de importaciones baratas, a la par que exportar resultaba cada día más costoso. En el entretanto la industria nacional, en particular la textil, se había visto duramente castigada, desatánndose un espiral de quiebras. Las inversiones en bienes de capital y en áreas claves como la minería, no fueron suficientes. En fin, el costo social siguió siendo grave. Entre 1970 y 1980, el número de familias en condiciones de pobreza creció del 28% al 44%.

En suma, hacia el final de los setenta hubo efectivamente crecimiento, se impuso el eficientismo disciplinario ortodoxo monetarista, se comenzó a abrir la economía chilena volviéndola más competitiva, y Chile pasó a ser una plaza atrayente para inversiones extranjeras. En cualquier caso, lo anterior se consiguó a un irremediable costo social, y haciendo de Chile una economía en extremo vulnerable, a causa de deficiencias estructurales agudizadas por las modalidades recién introducidas. El legado militar en materia económica, al igual que en derechos humanos, habría de tener consecuencias de largo plazo, que lo harían justificable según algunos, desquiliador según otros.

### ¿QUÉ TAN "MILAGRO"?

Quizás el efecto más perdurable del nuevo modelo fue el cambio de conciencia que comenzó a apoderarse del país. Según las nuevas directrices ideológicas, el desarrollo, entendido básicamente como crecimiento, orientado ahora por fuerzas desentramadas de antiguas restricciones impuestas por un estatismo socializante agotado e ineficiente, aseguraba más libertad. El mercado, visto así, se constituiría en el nuevo gestor de una economía moderna que, de ahí en adelante, pasaría a transformarse en el eje desde donde se habría de *revolucionar silenciosamente* a la sociedad chilena. En breve, el mercado habría de producir el "milagro" chileno. En otras palabras, y he aquí nuevamente la paradoja, lejos de erigirse en una contrarrevolución extrínseca el espíritu revolucionario con que Chile estaba impregnado desde hace ya un tiempo, el modelo neoliberal —una de las tres "planificaciones globales" según Mario Góngora— participa y se aprovecha de la misma lógica revolucionaria de la época, aunque con un signo distinto, no menos trastornadora que la que pregonaban sus com-  
petidores ya desplazados.

Chile, pues, seguiría *revolucionado*, proveyendo al mundo entero una vez más de un escenario ideal donde experimentar por vez primera paradigmas

vanguardistas. Chile, de este modo, se anticiparía a lo que muy luego Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y la institucionalidad financiera y monetaria internacional habrían de consagrar en los años ochenta y noventa como la única solución posible —la "final"—, con mayor razón aún luego de que colapsara el orden socialista-comunista y se impusiera el "fin de la historia", al menos el de la Guerra Fría. José Piñera, gestor y publicista del nuevo ideario, señala en su recopilación de artículos *Libertad, libertad, mis amigos* (1997):

Quando Chile celebre su bicentenario como nación independiente el año 2010, es muy posible que ya sea un país desarrollado.

Algún historiador, economista o político se preguntaría: ¿Cuándo se salvó Chile? (Una pregunta quizás menos dramática pero, sin duda, tan importante como la del personaje de Mario Vargas Llosa que se interroga al comenzar su novela *Conversación en la Catedral*: "¿Cuándo se jodió el Perú?").

La respuesta será que Chile se salvó durante la tormentosa década de los 70. En esos años convirtió su mayor crisis del siglo XX en la oportunidad de realizar una verdadera revolución por la libertad.

Incluso es posible que 1973 sea visto, con la perspectiva de la historia, como el comienzo del final de una época —a nivel mundial— caracterizada por el avance del comunismo y de las fórmulas económicas estatistas.

En Chile ese año el comunismo sufrió su primera derrota de la Guerra Fría y así se demostró que existía en el mundo occidental la voluntad de detener lo que, hasta entonces, parecía el avance incontestable del socialismo marxista.

Mezcla de visión retrospectiva catastrófica y anticipación exitista, el "modelo", como llegaría a conocerse, acabó por devenir en promesa autocon-  
plida.

Lo anterior es funcional a la manera como, ya más asegurados en la estructura del régimen, los propugnadores de las nuevas políticas siguieron promovíéndolas y autojustificándose. Declamos anteriormente que en los inicios de la dictadura militar no había acuerdo programático. Personeros de primera línea, como Causas, aparecían introduciendo un nuevo esquema a la par que encarnaban itinerarios profesionales muy ligados al antiguo régimen desarrollista proteccionista, compartido por todo el espectro político y empresarial desde los años treinta hasta la fecha. De modo que la transformación de las políticas económicas no fue fruto de una imposición *ex nihilo* de corte preferentemente doctrinario a espaldas de un proceso histórico acabado. Por el contrario, supuso cambios de visiones en técnicos que habían sido formados bajo esquemas anteriores y que en su momento adhirieron incondicionalmente a los presupuestos que con posterioridad habrían de reformar. Por consiguiente, no es que la economía haya cambiado, sino que los nuevos responsables de ella sufrieron crisis de visión; es decir, la economía siguió a la zaga de dichas conversiones sirviéndose del verticalismo autoritario que los militares, de repente, proveían.

Paralelamente, se debieron sortear una serie de obstáculos internos. Por de pronto, el sector empresarial tradicional acostumbrado a funcionar bajo reglas para ellos claras: fijación de precios, subsidios crediticios, facilidades aran-

celarias y tributarias, etc. Sector que no sólo debió ser convencido sino, además, salió duramente perjudicado por la aplicación de las nuevas medidas desindustrializadoras y generadoras de nuevos conglomerados económicos favorecidos, preferentemente financieros, frente a los cuales no siempre pudieron competir o integrarse. Cabe destacar, además, que el gobierno militar no retrotrajo el proceso de reforma agraria gestado desde la administración Frei Montalva. Es más, le puso término; si bien devolvió predios ilegalmente ocupados a algunos de sus dueños—un 30% de las diez millones de hectáreas expropiadas—, el Estado se reservó un 10%, un 31% fue vendido y el 29% restante fue adjudicado a campesinos, hasta ahora colectivizados. A la larga, como dan a entender Javier Martínez y Álvaro Díaz, lo más gravitante fue acelerar "la privatización de la propiedad agrícola [...] reestructurándola y favoreciendo el crecimiento de una economía de mercado en agricultura". Nuevas formas más industrializadas, *packings* y *tradings*, con una fuerza laboral en gran medida temporera—el inquilinaje, por de pronto, desapareció—, posibilitarían gran parte del auge exportador frutícola característico de la década de 1980. En definitiva, el que el gobierno militar no haya restaurado el antiguo régimen agro-señorial reafirma el sentido eminentemente expropiatorio y redistributivo que se ha ido imponiendo desde los sesenta, sin perjuicio de ir creando nuevos polos modernizantes de riqueza. El punto es clave por cuanto deja entrever cómo, coetáneamente a la imposición del nuevo régimen económico se fueron debilitando y neutralizando fuerzas políticas de derecha vinculadas al mundo tradicional, de por sí frágiles a causa de lo sucedido en los dos gobiernos anteriores. Otra aparente paradoja si uno piensa en el régimen militar como fuerza reaccionaria, no así si se lo conceptúa como motor revolucionario, continuador muchas veces de procesos iniciados durante los años sesenta y principios de los setenta.

Otro sector inicialmente reacio a aceptar el modelo fue el de los militares. Incidió aquí, también, la persistencia de una formación económica convencional que, siendo familiar a círculos castrenses, su oficialidad defendía y auspiciaba. Debemos recordar que durante gran parte del siglo los militares se habían inclinado por visiones socialistas y, después, desarrollistas. Consideraban que un Estado fuerte era esencial para la seguridad nacional; consecuentemente, no estaban por sacrificar áreas que estimaban estratégicas: desde luego la gran minería del cobre, nacionalizada y expropiada durante los gobiernos de Frei y Allende. Este punto fue decisivo, por cuanto las posturas privatistas más radicalizadas dentro del régimen encontraron en la oficialidad militar un freno insuperable en tal sentido. Tanto así, que se debió transar parcialmente con la ortodoxia. La economía chilena habría de liberalizarse pero, con el correr del tiempo, aproximadamente un 30%, si no más, permanecería en manos del Estado. Esto, sin perjuicio de que se trataba de un porcentaje lo suficientemente alto como para permitirle a los economistas controlar flujos de divisas y fondos cuantiosos, sumamente útiles a la hora de sostener equilibrios macroeconómicos. Junto al estatismo nacionalista existía en el mundo militar cierta conciencia social, resultado de su trato en terreno con la ciudadanía y la preocupa-

ción constante por posibles choques sociales, con mayor razón ahora que presidía el gobierno. De ahí que hasta en el seno mismo de la dictadura se discutió si el modelo podría significar un "estrangulamiento" de algún sector de chilenos. Los consiguientes roces entre militares y asesores civiles, por tanto, surgieron desde muy temprano. De hecho, la Junta creó su propio Comité Asesor en mayo de 1974, ocupado en estudiar resoluciones y proyectos legislativos, no del gusto de los economistas neoliberales. Incluso Manuel Contreras, en calidad de salvaguardia de la "Seguridad Nacional", participó en reuniones de alto nivel, en las que se discutió el nuevo modelo. Muchas de éstas fueron agitados, como se desprende de la anécdota frecuentemente citada y que en su versión más fiel—en la tesis de Sergio Undurraga Vergara—muestra el grado de pasión que la toma de alguna decisión podía llegar a suscitar:

Según un testigo presencial, el día 2 de octubre [1973] Gortuzzo [contraalmirante Lorenzo Gortuzzo, a la sazón ministro de Hacienda] es llamado a una reunión con la Junta de Gobierno. Los precios aún no habían sido liberados y con una devaluación de esa naturaleza la situación era en extremo delicada. Concurren varios altos funcionarios, entre ellos Villarzú, de Castro, Zabala, el general Caro, entre otros. Pinochet le da la palabra al almirante Merino y éste reprende fuertemente a Gortuzzo y finalmente le ordena echar marcha atrás en la devaluación. Luego Pinochet, quien estaba vestido en *tenida de campaña*, le ofrece la palabra a Hugo Aramada, un funcionario de la Contraloría que estaba propuesto para el ministerio de Economía y habla media hora anunciando que la política emprendida iba a ser catastrófica. Terminada su intervención, viene la réplica de los economistas y Merino no se convence y golpeando la mesa le vuelve a ordenar a Gortuzzo dejar sin efecto la devaluación. En ese momento Gortuzzo, se levanta, se cuadra y dice *no va echar marcha atrás* con la devaluación, vuelve a tomar asiento. Merino indignado por la desobediencia de su subordinado saca su arma de servicio y la pone arriba de la mesa, le da unos golpes con la palma de la mano y le ordena al ministro de Hacienda dejar sin efecto la devaluación. Gortuzzo hace un ademán negativo y se golpea el pecho. En ese momento Pinochet interrumpe la sesión y dice: "No pueden tomarse decisiones con las cabezas caldeadas. Vamos a tomarnos un café"... La decisión ha quedado en suspenso. A la salida, los asesores de Gortuzzo le preguntan que está pasando. Éste con toda tranquilidad y haciendo gala de su formación militar contesta: "Hemos ganado un día". Sin duda, el almirante interpretó el conflicto en términos de una contienda armada, en la cual los uniformados saben muy bien que las batallas se pueden ganar o perder en un día. Acto seguido le preguntaron por qué cuando Merino lo encaronó se golpeó el pecho. Contestó que le estaba recordando al almirante que él no era la única persona en la sala que estaba armada. En realidad, Gortuzzo también portaba su arma de servicio y sus asesores quedaron con la impresión que el almirante estaba dispuesto a usar su pistola automática de 9 mm.

Evidentemente, la violencia—no digamos que milagrosa—no fue del todo ajena a la implantación del modelo.

Ahora bien, se suele concebir la historia del modelo neoliberal como una "epopeya"—el término es invocado por Herrán Büchi—que se remontaría originalmente a un grupo de estudios, vinculado a grupos empresariales, que en 1970, con motivo de la campaña de Jorge Alessandri, habría comenzado a dise-

ñar un nuevo modelo de desarrollo. Se sostiene, además, que habría sido clave en dicha gestación la formación de economistas en el extranjero, muchos de ellos becados en la Universidad Católica de Chicago gracias a un acuerdo entre dicha institución y la Universidad Católica que databa de los años cincuenta y que había surgido del contexto de ciertas recomendaciones que en su momento hiciera la Misión Klein & Saks. Poco antes del golpe, personeros de la Armada se habrían acercado a dicho grupo, solicitándole un proyecto de medidas económicas para la eventualidad de que Allende fuera derrocado y los militares tuvieran que hacerse cargo del país. De tal suerte que "El Ladrillo", título del mentado proyecto, ya estaba en manos de la Junta al momento del golpe. Ahí se encontraría, pues, la médula del modelo económico imperante hasta hoy. En efecto, sus gestores de inmediato pasaron a respaldar técnicamente a los ministros militares, asumiendo a la brevedad un papel más protagónico, merced al nombramiento de Cauas como ministro de Hacienda y, definitivamente desde fines de 1976, luego de que Sergio de Castro relevara a Cauas en la tarea de implantar el "modelo".

Vista así, la "epopeya" neoliberal sigue un curso purista y lineal apoyado en el poder de las ideas monetaristas y en el sesgo apolítico-tecnocrático de sus rigurosos impulsores, interesados más bien en poner fin a un sistema de sustitución de importaciones reforzado por tesis desarrollistas cepalinas posteriores que, a juicio de los neoliberales estaba técnica y teóricamente caduco a la vez que estancaba económicamente al país. Si bien esta visión no es de suyo totalmente falsa, algunas connotaciones con que suele revestirse merecen cierta cautela. Desde luego, a menudo no se subraya debidamente la falta inicial de un programa coherente por parte de la Junta: las improvisaciones consiguientes que habrían de agudizar la crítica situación económica, las pugnas internas que rodearon a la opción más radical —a lo largo del régimen militar, no sólo al comienzo— y cómo la crisis de 1974 y 1975, hizo imperativa una apuesta mayor y global como último recurso posible para salvar una situación, según muchos, ahora sí que "catastrófica". El debate sobre estos puntos, de seguro, va a continuar muchos años más.

Lo que sí es claro es que el equipo más extremo identificado con las posturas neoliberales terminó por prevalecer. En no poca medida, esto se debió a su coherencia doctrinaria interna; influyó, también, el hecho de que representaba la visión de grupos económicos con enorme poder financiero, comunicacional y vínculos con el exterior, que con anterioridad al golpe ya venían promoviendo, y que, luego, prestarían su apoyo irrestricto a una vez constituido el régimen militar con proyecciones de largo aliento. El régimen dudosamente se habría sostenido de haberse restringido únicamente a una fórmula estrictamente militar. Con la imposición del modelo económico quedó sellada, por tanto, la alianza empresarial-militar que le permitiría al régimen ir abriéndose a una creciente participación civil, aunque todavía restringida, a la par que le concitó apoyo externo, y le imprimió una mirada proyectual más congruente con la que contemporáneamente se fue imponiendo en el mundo occidental. Es más, de

ese modo se podía amortiguar la brutalidad policial en clave Guerra Fria sudamericana, que, con los años, haría del gobierno militar un anacronismo extrañamente imbatible.

Con todo, suponer que el régimen, en la medida en que contempla una mayor participación civil al optar por un liberalismo económico, se torna menos violento significa no entender su naturaleza dictatorial y sus no menores alcances totalitarios. El modelo económico podrá haber abogado por la libertad, pero su propia aplicación, el costo social que trajo consigo, el hecho de que la discusión económica no admitiera cuestionamientos esenciales del modelo una vez que se fueron logrando algunos éxitos, en fin, el sesgo fundamentalista de sus gestores, las más de las veces acrticos si no partidarios de la política represiva de la dictadura, hacen cuestionable su supuesta adherencia liberal en un sentido amplio y propio del término. Los eventuales intentos de complementar el modelo económico con un modelo político "aperturista", ya veremos, nunca van a cuestionar el papel de las Fuerzas Armadas, su carácter tutelar permanente, y el papel que les cupo en el parto traumático. De hecho, con el correr del tiempo si hasta lo terminaron aceptando incluso los opositores al régimen en virtud de lo cual se les permitió llegar al poder a fines de los ochenta. Pero la idea ya estaba, de hecho, desde su comienzo.

En palabras de Pablo Barzona, uno de los artífices del modelo y más disciplinados ministros de Pinochet, en entrevista de 1980: "Yo no tengo dudas de que a partir de 1973 y durante muchos años en Chile hacía falta un gobierno autoritario—absolutamente autoritario—que pudiera hacer la reforma contra los intereses de cualquier grupo, por importante que fuera... [y] creo que en este país hace falta todavía un receso político fuerte". Cuando Barzona habla de "cualquier grupo" de interés por importante que fuera, se deduce de sus palabras que no excluye ni siquiera a los grupos empresariales y, es de suponer, tampoco a los equipos técnicos llamados a realizar las reformas estructurales. En otras palabras, Barzona reconoce abiertamente los límites libertarios de la gestión económica, toda vez que éstos quedan subordinados, en última instancia, al poder omnimodo de los militares.

Al igual que en ese primero de muchos días, tanto esos civiles reclutados para aliarse a los militares como el Chile restante habríamos de seguir siendo—todos—gobernados con *mano militar*.

te en tareas de gobierno local, y, luego, creando el partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Habría sido Guzmán quien, además, convenció a Pinochet de acortar los plazos, consignados en la Constitución plebiscitada en 1980. En vez de un periodo continuo de dieciséis años asignados a Pinochet—según algunos la "transición" propiamente tal—, se optó por dos periodos consecutivos de ocho años: un único periodo presidencial hasta 1988 bajo un estatuto "transitorio" en que la Constitución estaría parcialmente vigente, y que daría paso a un segundo periodo en que Pinochet podría ser reelegido sin competencia mediante un nuevo plebiscito, todo esto bajo el supuesto de que lo iba a ganar. Conste, en todo caso, que conforme a la lógica que inspira la Constitución ésta no dependía, aún en 1980, según Guzmán y otros, de una aceptación por parte de la ciudadanía. Como puntualizará la *Declaración de Profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile respecto de la Convocatoria a Plebiscito para Ratificar la Constitución* (agosto de 1980), uno de cuyos firmantes fue Guzmán, y que, con toda razón, sirve a Cristi para definir el tenor de dicho texto constitucional:

En caso de no aprobarse el texto constitucional, no perderá por ello la Honorable Junta de Gobierno el Poder constituyente originario, en el ejercicio del cual proceder en lo formal del modo que más conveniente le parezca para dotar al país, en definitiva, de una nueva institucionalidad en la oportunidad y modo que estime del caso, mientras no se aparte de la consecución del bien común en el ejercicio de todas sus potestades.

De lo que se infiere que lo que no fue "plebiscitado" en 1980 es el hecho de que los militares presumen para sí la potestad de establecer las reglas, pudiendo o no ser éstas aceptadas por la ciudadanía, o, para ponerlo en términos del mismo Guzmán en 1974: "[La Junta Militar] ha asumido el poder total de modo que sólo es responsable ante Dios y la historia". Al final se llega siempre a lo mismo: todo intento de "transitar" a una nueva institucionalidad exige como condición *sine qua non* subordinarlo al poder fáctico incuestionable que los militares esgrimen tanto entonces como después.

#### DEL ENFRENTAMIENTO A LA TRANSACCIÓN

El temido que siguió a la aprobación forzada de la Constitución fue en extremo difícil para la dictadura militar pero no menos para la oposición, lo que sirvió paradójicamente para afianzar el ordenamiento establecido.

El contexto auspicioso en que se insertara la propuesta, si bien vaga pero algo más definida de la nueva institucionalidad, estuvo marcado por una mayor participación civil y los primeros logros económicos del régimen dictatorial. A partir de 1982, sin embargo, el escenario favorable cambió bruscamente. Factores externos dejarían en evidencia la creciente vulnerabilidad del modelo impuesto. En efecto, la combinación de variables que mencionamos en un ante-

rior capítulo generó un cuadro nuevamente crítico, concretamente: el fuerte endeudamiento de la banca recientemente privatizada y desregulada que se había embarcado en franca especulación financiera gracias a la inicial superabundancia de créditos externos—los llamados "petrodólares"—, la inundación de importaciones baratas, el desincentivo de las exportaciones nacionales, el demeritamiento de la industria nacional y la desprotección social de los trabajadores. A ello se agregaría, ahora, el impacto negativo de la crisis mundial producida por nuevas alzas del precio del petróleo, la consiguiente reducción de la inversión extranjera, la baja demanda por productos chilenos, y el incremento de las tasas de interés en el mercado internacional obedeciendo a criterios neoliberales, auspiciados por Reagan y Thatcher.

Las dimensiones de la crisis no tardaron en hacerse patentes. En 1982 el PGB cayó en un 14,4%. Entre 1981 y 1982 los términos de intercambio descendieron en más de un 20%, y el servicio de la deuda externa se elevó desde un 20% del valor de las exportaciones en 1978 a un poco menos del doble en 1982. La inflación que alcanzó un 9,5% en 1981 volvió a ascender nuevamente por sobre el 20%. Se produjo una oleada de quiebras de empresas (810 en 1982 y 381 en 1983) y, en el ámbito financiero, la situación alcanzó niveles dramáticos. En palabras de Genaro Arriagada:

en el breve plazo de quince meses, la autoridad hubo de intervenir o liquidar trece bancos y cinco financieras, proceder a ordenar la fusión de otros dos con el objeto de evitar su colapso y aportar enormes sumas de dinero para respaldar el sistema financiero privado en su conjunto. A mediados de 1983, de un total de diecinueve bancos comerciales nacionales, sólo siete no habían sido objeto de intervención o liquidación y de un total de veintidós financieras y bancos de fomento, sólo ocho habían escapado de la liquidación o del control del Estado. A fines de 1983, la cartera vencida, incluida la vendida al Banco Central, alcanzaba al 16,8 por ciento de las colocaciones, al paso que la cartera riesgosa comprendía otro 15,4 por ciento de ese total. A esta última fecha, las pérdidas netas de los bancos equivalían al 242 por ciento de su capital y reservas.

Se calcula que la pérdida en reservas internacionales fue superior a US\$ 1.700 millones; y el Estado terminó siendo el aval de la banca privada, una tradición mayúscula con la lógica neoliberal imperante. Ahora bien, las cifras oficiales de cesantía, habiendo registrado un 19,6% en 1982, mostraban un pre-ocupante 26,4% en 1983. A comienzos de ese año, cerca de un medio millón de personas trabajaban en el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y en el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH), ambos esquemas de emergencia; las cifras no oficiales de cesantes, para sectores poblacionales, llegaban al 50%, siendo incluso aún mayores entre jóvenes.

Háys que pensar que por esos años todavía se discutía vívamente el modelo económico neoliberal impuesto: su aceptación generalizada dentro del universo político vendría después, en los años noventa. Los partidarios calificaban el desempeño económico reciente como un "milagro". Entendían que las transformaciones sustantivas que introducía el modelo abrirían finalmente el camino

hacia el desarrollo. Y argumentaban apuntando hacia los logros obtenidos en materia de diversificación de exportaciones gracias a la apertura del comercio exterior, en el ordenamiento de las finanzas públicas que ponía fin a décadas de déficit fiscal, y en la constitución de un mercado libre que había terminado con las múltiples regulaciones estatales que entorpecían el desenvolvimiento de la empresa privada. Los detractores, en cambio, insistían en que se trataba a lo sumo de una mera recuperación de la crisis de los años setenta aun cuando la población había perdido gran parte de sus defensas sociales. Estadísticas de CIEPLAN, citadas por Arriagada, confirman este último planteamiento; "durante el período 1974-82 el gasto social por habitante disminuyó en un 20 por ciento y las cifras de inversión pública en sectores sociales se redujeron en un 80 por ciento entre 1974-82". En efecto, se vivía una situación en extremo inestable, que acumulaba años de castigo político represivo aparejado a un revolucionario cambio económico-social, propicio a un despertar crítico, si es que no en potencia radical. De consiguiente, no es extraño que el impacto de la crisis económica, la más grave que sufriera el país después de la de los años treinta y todavía bajo dictadura, culminara en un escenario altamente explosivo cuya principal expresión fue el llamado a movilizaciones y protestas que estalló a mediados de 1983.

Antecede a esta nueva fase la recomposición de la organización sindical, debilitada no sólo por la persecución y descabezamiento que sufrieran sus directivas sino, además, por el intento oficialista de imponer un nuevo "Plan Laboral". Este último se demostraba proclive a liberar la iniciativa empresarial de "trabas" legales protectoras del sector trabajador, circunscribiendo la negociación salarial al interior de la empresa, prohibiendo el derecho a huelga a ciertas áreas, en fin, amenazando terminar con antiguas reivindicaciones y conquistas sociales. Gracias a fuertes apoyos internacionales, entre otros la posibilidad de llamar a un boicot internacional de productos chilenos, el gobierno se vio obligado a tolerar una creciente oposición de parte de grupos vinculados a la Democracia Cristiana y a la izquierda, los cuales además de exigir y triunfar en elecciones sindicales, terminaron convocando a un paro nacional en mayo de 1983.

A este llamado a paro se sumaría un espectro partidista cada vez más amplio. Desde múltiples fuentes —organizaciones no gubernamentales, exilio, clandestinidad, agrupaciones de derechos humanos y de Iglesia, redes de cooperación internacional, e incluso sedes diplomáticas acreditadas en el país— se produjo un renacer de la actividad política potenciada, obviamente, por el debilitamiento creciente del régimen. Distintas corrientes lograron suscribir en marzo de 1983 un *Manifiesto Democrático*, documento que exigía la renuncia de Pinochet como condición de un acuerdo nacional amplio. El 11 de mayo tuvo lugar la primera jornada de protesta y paro liderado por sectores claves —el cobre y las universidades—, seguido por un caceroleo gigantesco hacia la noche con caravanas de automóviles tocando bocinas y volcándose a las calles centrales de Santiago. Hubo agresiones de parte de la fuerza policial, dos personas

murieron en sectores periféricos y otras 600 fueron detenidas; días después el gobierno suspendió las transmisiones de radio Cooperativa, otras tantas emisoras sufrieron atentados y masivos allanamientos se efectuaron en cinco poblaciones en la zona sur de la capital. Jornadas del mismo tenor se fueron sucediendo periódicamente en los siguientes meses, alcanzando niveles preocupantes de violencia y agitación, seguidos por escaladas represivas de parte del gobierno, detención y relegación de dirigentes sindicales y políticos, despidos masivos de trabajadores, toque de queda, bombazos, autos no identificados que disparaban a los manifestantes, barricadas, fogatas, redadas, apagones en todo el territorio nacional, hasta que por último se declaró estado de sitio. La situación llegó a su máxima expresión dramática durante la protesta del 11 de agosto, cuando Pinochet, junto con nombrar a un político tradicional, Sergio Onofre Jarpa, como ministro del Interior, y anunciar con ello cierta disposición a dialogar, literalmente hizo "invadir" Santiago con 18 mil soldados, cifra probablemente mayor al contingente empleado casi justo diez años antes con ocasión del golpe. En las dos noches sucesivas a la protesta murieron 26 personas.

El intento de diálogo, que siguió entre el gobierno y la oposición, mediado por el arzobispo de Santiago monseñor Juan Francisco Fresno, no prosperó. Esta última, ya autodenominada Alianza Democrática, venía exigiendo un acuerdo nacional, una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, la renuncia de Pinochet y un gobierno provisorio de "transición". Con todo, se obtuvieron algunas concesiones: se autorizó el retorno de un número limitado de exiliados y se comenzó a hablar de "apertura" notándose cierta distensión pública. Sectores más a la izquierda, excluidos de la Alianza Democrática, a su vez, se fueron aglutinando en lo que se denominó Movimiento Democrático Popular (MDP), mientras que en la derecha surgieron grupos que apoyaban a Jarpa, grupos que eventualmente confluyeron en Renovación Nacional (RN), paralelos a otros abiertamente críticos de su gestión (UDI), anunciando con ello divisiones futuras. No ayudó a los círculos más "aperturistas" del oficialismo la tenaz pugna interna en torno a cómo enfrentar la crisis económica, entre adherentes a seguir con una postura neoliberal a ultranza por un lado, y sectores abiertos a la posibilidad de revisar los lineamientos más ortodoxos del modelo o dispuestos a admitir soluciones de tipo más populista por el otro. Al final, una combinación de factores —el hecho de que la crisis económica no amainara, que las protestas dejaran a descubierto la incapacidad del régimen dictatorial de controlar el orden en las barriadas populares, que se temiera una escalada violentista aún mayor con apoyo externo, y, por último, que peligrara la coherencia interna entre sus simpatizantes— llevó a Pinochet a poner término a esta primera "apertura" política a principios de 1985. De ahí en adelante, apostó nuevamente por la fórmula de gobierno que le era más afín, diseñada con anterioridad a la crisis: el itinerario inmodificado de la Constitución, el modelo neoliberal en la economía y el expediente de la represión.

En realidad, Pinochet constató que no sólo lo peor ya había pasado, sino que el régimen había vuelto a fortalecerse, recuperando para sí la conducción

del proceso. Paradójicamente quien le dio la clave de este vuelco de tuerca fue precisamente la oposición a su gobierno. Cuestión que los sectores contrarios a la dictadura, después de todos estos años, aún no parecen dispuestos a reconocer, prefiriendo ver el asunto desde una perspectiva más favorable a sus posturas.

Conforme a la visión apologetica de los opositores, la crisis de 1982-1985 permitió la consolidación de un bloque democrático opositor a la dictadura que posteriormente desembocaría en la Concertación de Partidos por la Democracia triunfante en el plebiscito de 1988. Una serie de iniciativas que van desde ese primer *Manifiesto Democrático*, o desde antes, remontables al Grupo de Estudios Constitucionales ("los 24"), y que se proyectarían después en la Alianza Democrática, en el llamado Proyecto Alternativo de la DC, en el Acuerdo Nacional, en la Asamblea de la Civilidad, hasta llegar a la Campaña del NO, habrían servido para reunir y afatar sectores que hasta 1973 se encontraban en trincheras opuestas, en particular los demócratas cristianos y socialistas, y en menor medida, a modo de acompañamiento decorativo, radicales y una que otra simbólica, aunque poco representativa, figura de derecha. Se suele mencionar, también, el *aggravamiento* doctrinario que se habría producido en círculos socialistas, fruto de la toma de conciencia de la derrota sumado a un exilio forzado que los habría convencido acerca de las virtudes del mundo occidental y de la socialdemocracia, o si se quiere, el haber sufrido y constatado de primera fuente la decadencia y chatura del estatismo de los socialismos reales, anticipándose en esto al fin de la Guerra Fría que culminaría en 1989. Clave importante de este acercamiento entre demócratas cristianos y socialistas "renovados" fue el distanciamiento de los últimos respecto al Partido Comunista que, de hecho, venía asumiendo desde 1980 una postura más extrema, favorable a una estrategia insurreccional ("todas las formas de lucha"), desvirtuando el papel más moderado que jugara durante los años de la UP. Cabe recordar que el PC tendió a vincularse estrechamente a un grupo terrorista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que surgió a fines de 1983, a la vez que ambos compartirían el diagnóstico de que en el país estaba "madurando rápidamente una situación revolucionaria". Conste, también, que en estos mismos años, a nivel internacional se barajaban distintas estrategias para hacer colapsar dictaduras. Por un lado, las llamadas "transiciones" democráticas, principalmente la portuguesa después del triunfo de la "Revolución de los Clavetes" (1974) y la española luego de la muerte de Franco (1975), y por el otro, las luchas abiertamente confrontacionales como eran la Revolución Islámica que derrocó al Shah (1979) y la Revolución Sandinista contra Somoza en Nicaragua (1979). De consiguiente, socialistas y demócratas cristianos de repente aparecían "reconciliados" y "consensuados"—lo que parecía una verdadera hazaña—, pautados además desde el exterior por ejemplos de moderación exitosa, y, alternativos a una posible salida más dura.

La dificultad principal para acoger esta tesis es que es demasiado maniquea. Contraponen a los autoritarios —representados por la dictadura militar y por su oposición más recalcitrante—, con su supuesta contraparte democrática

y moderada. El sesgo es evidente y pasa de largo las sutilezas de un proceso infinitamente más complejo. Es más, esta visión que se concentra en la conformación de una oposición ya relativamente "consensuada" entre sí oculta una dimensión fundamental del contexto político en el cual se articula dicho "consenso", a saber, que es indiscutible que el régimen dictatorial pretendía institucionalizar el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, y que los sectores que eventualmente entraron a compartir el poder, o, para ser más precisos, cogobernar con éstas después de 1989 debieron atenerse estrictamente a los condicionamientos forzados que exigiera el gobierno militar a fin de permitirles, y sólo bajo esas restricciones, acceder a la primera línea de autoridad y liderar la siguiente fase. En el fondo, la tesis apologetica anterior no se hace cargo de las transacciones tácitas y explícitas que aconsejaron un acuerdo "consensuado", no sólo entre socialistas y demócratas cristianos, sino entre éstos y el régimen dictatorial, ya antes de 1988. De aceptarse esta otra tesis que aquí argumentamos, se estaría, evidentemente, ante una historia muy distinta de lo acontecido desde la dictadura militar hacia adelante, por cierto, otra versión de la *eterna transición*, pero al menos un poco más compleja. Lo necesario como para explicar por qué ésta ha tomado tanto tiempo, al punto de constituirse en una suerte de "normalidad" pactada, aunque insuficiente al no haberse plasmado en un acuerdo auténticamente nacional, social y político, generalizado. De ahí que tengamos que volver a lo mismo y seguir hablando de *transición*.

#### LOS TÉRMINOS DE LA TRANSACCIÓN

Una serie de indicios corroboran la existencia de un acuerdo tan temprano entre oposición y gobierno militar. A falta de un reconocimiento expreso, sin embargo, sólo cabe inferir dicha transacción a partir de los hechos, los cuales, claro, terminan por decirlo todo dada la naturaleza fáctica del régimen, como hemos venido sosteniendo. Desde luego, sabemos que las protestas, a causa de su radicalización progresiva si es que no con ribetes anarquizantes, generaron alarma tanto en el oficialismo como entre los opositores moderados, incluidos los sectores populares y no sólo las capas medias y altas. Valga el siguiente testimonio de un joven poblador, militante de las Juventudes Comunistas, recogido por Patricia Politzer, que resume gráficamente lo que estaba sucediendo.

La primera protesta nos dejó impresionados, superó todas las expectativas: todo el mundo estaba en las calles. La cosa nos quedó grande, no hicimos nada, ni barricadas ni nada. Los pacos tampoco se lo esperaban, porque ni se asonaron.

Toda la gente salió a la calle a tocar las ollas. Todo el mundo estaba contento, parecía carnaval, saltaban, huevaban, tocaban guitarra, cualquier locura, parecía como que Chile hubiera ganado el mundial de fútbol. ¡Es una de las cuestiones más encachadas que me ha tocado vivir!

Pero con un día de recreo no se gana nada. Saltando en la calle no vamos a echar a este gobierno y, por lo tanto, hubo que empezar a darle mayor condic-

ción a la cosa y comprometerla con el derrocamiento de la dictadura. Ahí el asunto se empezó a poner más serio y más feo, y los viejos se asustaron y dejaron de salir a la calle. No es que no apoyen las protestas, pero se dieron cuenta de que las condiciones de la púlea cambiaron y no se sienten capaces de asumirla. ¿Cómo se le va a pedir a un viejito de 40 ó 50 años que haga las cosas que hago yo? Ahora, los que salen son los cabros que saben que si seguimos saltando, riéndonos y tocando guitarra, no le vamos a ganar a nadie y el gobierno va a seguir mandando.

Muchas veces me tocaba detener a los pacos en marchas, en tomas de terreno o en protestas. Rara vez caía un arma o una granada artesanal, había que hacerlo con piedras, palos, molotov o lo que tuviéramos. Yo nunca fui muy bueno para las molotov, los más duchos ni siquiera prendían la mecha, les bastaba con la pura quimica, pero yo siempre tuve miedo de quemarme porque una vez vi a un tipo que levantó la molotov, le cayó todo por el brazo y se quemó entero [...]

En realidad, nunca hice acciones muy audaces en la Jota [Juventudes Comunistas]. Quizás fue porque nuestra unidad era medio rasca, hay otras que tienen más prestigio de combate, que pelean bien con los pacos y supongo que a esas les llegaría más instrucción. Los recursos llegan de acuerdo a las capacidades porque, si nadie sabe usarlos, se pierden.

Estuve unos siete u ocho meses en esa unidad de combate, pero quería aportar más. Sabía que podía dar más cuando me fueron a buscar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez].

En un plano aún más espectacular sobresalen dos operaciones cruciales de esta escalada violentista que, no obstante la audacia empleada, terminaron por favorecer al régimen: el hallazgo de un arsenal masivo en Carrizal, en el norte del país (agosto de 1986), de indiscriminada proveniencia extranjera, y el magnicidio frustrado en contra de Pinochet y su escolta motorizada en el Cajón del Maipo (septiembre de 1986), que sellaría el ocaso de la vía armada.

La contrapartida de esta radicalización fue el recrudescimiento de la represión por parte de los aparatos de seguridad y las fuerzas de orden. Según datos de la Vicaría de la Solidaridad se observa un drástico ascenso en las cifras de violaciones a los derechos humanos desde que irrumpen las protestas. Si en 1982 hubo sólo 1.789 arrestos, éstos se disparan en los años siguientes: 15.077 (1983), 39.440 (1984), 9.116 (1985), 33.665 (1986). Otro tanto ocurre con muertes: 24 (1982), 96 (1983), 74 (1984), 66 (1985), 58 (1986); también con relegaciones: 81 (1982), 130 (1983), 170 (1984), 171 (1985); y, con denuncia de torturas: 123 (1982), 434 (1983), 205 (1984), 168 (1985), 255 (1986). De estos años datan también algunos de los crímenes más espeluznantes de la dictadura militar que comovieron a la opinión pública: el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez (febrero de 1982) que acarrearía como secuela el pretendido suicidio de su presunto asesino Julio de 1983); el secuestro y degollamiento de tres dirigentes comunistas (marzo de 1983); el caso de dos jóvenes quemados, uno de ellos fotógrafo, muerto, y la otra, una estudiante gravemente desfigurada, apresados durante manifestaciones (Julio de 1986); el asesinato de cuatro militantes de izquierda, entre los cuales figuraba un periodista como represalia por el atentado a Pinochet (septiembre de 1986); y la matanza de

Corpus Christi (junio de 1987), también llamada "Operación Albania", en que se asesina a doce miembros del FPMR, simulando un enfrentamiento.

Es en este contexto cada vez más polar, agravado un enfrentamiento. ca que dejaba entrever sólo pequeñas muestras de recuperación, que hay que situar una serie de hitos que manifiestan un indementible acercamiento hacia el régimen militar por parte del sector moderado de la oposición, vale decir, aquéllos que preferían no verse vinculados al PC o al FPMR. Pinochet ya había puesto las condiciones, en declaraciones a *La Tercera* en octubre de 1983: "Los que están contra el comunismo están con nosotros. Los que están a favor del comunismo, están contra nosotros". Se suele destacar, por ejemplo, la participación de Patricio Aylwin, a la sazón desplazado del liderazgo DC, en un seminario del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), en junio de 1984, que contó también con la presencia del ex senador de derecha, Francisco Bulnes, en que el primero sostuvo expresamente que había que aceptar la Constitución de 1980 "como un hecho", lo que lleva a que en su libro *Crónica de la Transición*, Rafael Oltano remonte a este encuentro el inicio de su relato de la "transición". Otro signo inequívoco de *rapprochement* y reconocimiento fáctico de la institucionalidad militar es el documento divulgado un poco después del atentado a Pinochet por el sociólogo alguna vez mapu, luego socialista, José Joaquín Brunner. Planteaba Brunner que la estrategia de movilización social había fracasado, que había que distanciarse de la opción insurreccional y lograr una "salida política [...] negociada con las Fuerzas Armadas". Otras figuras de la Democracia Cristiana, entre ellas Sergio Molina y Edgardo Boeninger, se sumaron rápidamente a la tesis de que "no había salida política sin negociación". Boeninger fue incluso más conciliatorio; postulaba "un escenario negociado en que resulta inevitable hacer concesiones". Que los cuatro anteriores hayan terminado asumiendo papeles protagónicos en los posteriores gobiernos de la Concertación subraya la continuidad —en eso tienen razón los apologetas— que ha habido desde ese entonces, desde 1986 a lo menos, pero asentada en una fuerte predisposición concesiva, sin visible contraparte de los militares, salvo permitir a los opositores acceder en 1989 a un poder hasta entonces inabordable, aunque ello no significara en lo futuro dejar de ser tutelado.

El pánico de los moderados frente a la amenaza insurreccional vino a reforzar las reglas del juego político fijadas por el régimen, tanto el itinerario constitucional como el que Pinochet fuera a reelección plebiscitaria y no abiertamente competitiva en 1988. Este, además, agregó a su favor la gradual recuperación de la economía bajo la conducción de Hernán Büchi. Su gestión volvió a entusiasmar a los privados tanto nacionales como extranjeros, quienes le devolvieron su confianza al gobierno después del breve interludio populista en lo económico y aperturista en lo político. Se equilibraron los índices macroeconómicos, se redujo el déficit fiscal, a la par que repercutió favorablemente el descenso internacional de las tasas de interés. Se dio inicio a un proceso de diversificación de exportaciones amparadas por un tipo de cambio real, se fueron introduciendo propuestas de "capitalismo popular" a fin de atenuar la críti-

ca por la falta de transparencia que había caracterizado la concentración económica empresarial. Y, todo ello, por último, redundó en un sostenido aumento del PIB de 5,6%, 6,6% y 7,3% entre 1984 y 1988, llegando a la asombrosa cifra de 10,2% en 1989. Paralelamente, a los críticos de oposición no les quedó más alternativa que admitir, aunque inicialmente para callado, los logros del régimen. Al punto que de ahí en adelante, a la hora de los análisis, tendieron a plegarse a las lógicas del modelo sin perjuicio de seguir enfatizando los todavía altísimos costos sociales que éste implicaba. Si, incluso, llegaron a expresar, a regañadientes cuando no con un dejo de cinismo, durante las campañas de 1988 y 1989, que el modelo económico podría andar tanto mejor si ellos lo administraran. Con lo cual terminaron aceptando, primero los términos políticos y luego las reglas del orden económico impuesto por la dictadura militar. Boeninger lo ha concedido, claro que retrospectivamente en 1997:

Las propuestas del programa (de Aylwin) [la primera administración concertacionista] comprometieron un marco para el orden económico que, sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresario y de la clase propietaria, condición necesaria para poder sostener, en democracia, el crecimiento sostenido de la economía logrado a partir de 1985. De modo indirecto el éxito postero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer.

No cabía aún confesarlo; a lo sumo, había que capitalizar los límites de este nuevo escenario.

De ahí que el plebiscito significara, ante todo, un triunfo restringido al plano estrictamente electoralista y publicitario. El doble discurso, como opción firmemente calculada para maquillar la derrota reciente de la vía confrontacional, y el hecho de que necesariamente tenían que atenderse a los términos del oficialismo si querían hacerse parte del orden político y económico establecido, condicionó la estrategia comunicacional empleada para el plebiscito de 1988. Ésta, sin duda, fue exitosa. El diagnóstico previo, confeccionado por un contingente técnico-profesional surgido de organismos no gubernamentales apoyados desde el extranjero, arrojó un cuadro social novedoso en que destacaba, por sobre todo, el miedo generalizado a posiciones extremas provenientes de cualquier bando, acompañado de apatía política, individualismo, anhelo de cambio más personal que colectivo y una fuertísima dependencia de los medios de comunicación masivos, en especial la televisión. En el fondo, se tomó conciencia de un escenario en potencia proclive a un giro, pero supeditado a que no se volvieran a radicalizar las posiciones en contienda. La campaña a favor del NO aprovechó mejor dicha advertencia; el gobierno, en cambio, a todas luces, la desatendió olímpicamente atrinchetándose en un discurso que magnificaba las disensiones internas de la sociedad chilena y, contradictoriamente, parecía estancado en 1973. Según la versión apologeta favorable a los gobiernos que han

ido accediendo al poder con posterioridad a 1989, la oposición a la dictadura logró, en 1988, hacer renacer el acervo "democrático" del país real, hasta entonces adormecido, reencantando al público, o, mejor dicho: a la "Gente", con un lenguaje épico comunicacional que le devolvía su dignidad. En palabras de Eugenio Throni:

La estrategia del NO consistió básicamente en la formulación de mensajes y en la organización de eventos que, en vez de reforzar las tendencias conflictuales y desintegradas dominantes por años en la sociedad chilena, respondieran a los anhelos reprimidos de reconciliación y cohesión social.

La franja del NO en la televisión fue una perfecta ilustración de esta estrategia. Pero en realidad toda la campaña se orientó en ese mismo sentido: de allí los esfuerzos por hacer de la misma campaña una comunidad al interior de la cual cada uno podía expresarse; o la imagen de unidad que proyectaron los partidos opositores, que devolvió a millones de chilenos su sentimiento de poder; o el compromiso de los partidos políticos en el sentido de que su primera prioridad sería ampliar las oportunidades socioeconómicas de las personas, antes que emprender grandes transformaciones de tipo estructural; o las iniciativas, formación de apoderados, sistema de cómputo paralelo, etc., destinadas a generar confianza en la capacidad de la oposición para controlar un eventual fraude; o la actitud de los líderes políticos, que recorrieron todo el país acompañando y escuchando al pueblo, o, en fin, la promoción de múltiples actos: la inscripción en los Registros Electorales, concentraciones, marchas, etc., a través de los cuales los chilenos pudieron recuperar un sentido de pertenencia que añoraban.

A la luz de lo que ha ocurrido después del triunfo en el plebiscito, el asunto admite otra perspectiva. Es cierto que los comunicólogos de oposición insistieron en las convergencias y centraron su mensaje en un amplio segmento de indecisos que el pulso previo había logrado auscultar como decisivo. Pero lo que la oposición, en esto más realista que el gobierno si es que no más a tono con el legado dictatorial, logró percibir mejor fueron, paradójicamente, los condicionamientos sociales que años de represión y autoritarismo habían hecho ahondar profundamente. Ello la llevó a desechar cualquier tentación que pudiera parecer combativa y rabiosa prefiriendo, en cambio, el otro extremo: no representarle al electorado su propia trayectoria histórica reciente marcada por el choque violento y excluyente de extremos opuestos, su pasividad a menudo obsecuente frente a la dictadura, en fin, su propia comodidad e incomodidad esquizofrénica, amén de contradictoria, ante distintos experimentos políticos-sociales que se venían esgrimiendo desde los años sesenta y que habían contado, una y otra vez, con el apoyo mayoritario de la sociedad chilena. De consiguiente se optó, como bien confesan los otros cerebros publicitarios de la campaña, no sólo Throni, por un "tono" festivo, liviano, que obedecía a técnicas probadas de *marketing*, en las que ellos mismos se venían entrenando desde hacía tiempo como publicistas de negocios privados. José Manuel Salcedo, figura clave de la campaña, por ejemplo, se había dedicado hasta hacía poco a promover las virtudes del sistema financiero mediante una ingeniosa propaganda televisiva, empleando artistas estelares del teatro Ictus marginados de los canales. En efec-



to, la publicidad era ya una de las más pujantes y lucrativas industrias emergentes, no tradicionales. Lo seguiría siendo, aún más, después del éxito indismutable del equipo de "creativos" de imágenes concertacionistas.

Aun a riesgo de que lo sustancial quedara, utilizando otro término acuñado por los comunicólogos, "como una cosa en el aire", la concertación no sólo triunfó en el plebiscito sino que abrió un nuevo subcapítulo político. No un logro menor. En efecto, se eludieron los aspectos políticos de fondo, sin perjuicio de que, en los hechos, se ratificaron plenamente los límites de la nueva institucionalidad. Es más, se confirmó que el país estaba lejos del escenario volcánico de 1973, o incluso de 1983-1986, y que la "transición" no obstante sus aparentes estancamientos no había inmovilizado completamente al país. Por muy empata-do que se estuviera en lo político electoral —la opción NO obtuvo un 54,6%, el Sí oficialista, un 43,04%, y faltaba aún una nueva elección, esta vez presidencial— los resultados del plebiscito no desmintieron otro hecho: el que las Fuerzas Armadas no por ello iban a renunciar a su derecho constitucional —según la Constitución del 80 referendada por el acto plebiscitario— a seguir dirigiendo el "tránsito". ¿"Tránsito" a qué?, ¿a más de lo mismo? Tres años antes, emplazado a responder qué exactamente entendía por "transición" y "normalidad", Pinochet había acuñado el término "dictadura de la democracia". Trece años antes, en agosto de 1975, Pinochet había proclamado ya la doctrina y lógica de la irreversibilidad: "El gobierno, en el esquema cívico-militar, inició un proceso el 11 de septiembre de 1973; es una vía sin regreso". Ya hemos visto que Jaime Guzmán, a su vez, había ideado una fórmula maestra que contemplaba el acceso al poder de los adversarios, pero circunscritos a un reducido margen de posibilidades de modo que pudieran "seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría".

Lo más extraordinario del desenlace de 1988, sin embargo, es que dichos adversarios no sólo ratificaron y permitieron poner en práctica este esquema sino, además, en calidad de oposición triunfante aceptaron perfeccionarlo. Felipe Portales, en *Chile: una democracia tutelada*, refiriéndose al acuerdo que siguiera al plebiscito de 1988 —una serie de reformas constitucionales que fueron sometidas a un nuevo plebiscito en 1989 mayoritariamente aprobado— ha llamado la atención respecto al carácter altamente concesivo, por parte de la Concertación, que inspiró esta última transacción justo antes de enfrentar la elección presidencial. Si bien esta reforma fue planteada como un mero trámite, Felipe Portales convincentemente sostiene que entrañaba un "pacto secreto" en virtud del cual la Concertación aceptó modificar dos artículos claves de la Constitución (artículos 65 y 68) que le otorgaban "al Gobierno próximo a establecerse en 1990 la posibilidad de aprobar toda la legislación ordinaria, teniendo mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra". Dichas disposiciones habían sido redactadas bajo el supuesto de que Pinochet ganaría el plebiscito de 1988, lo cual no ocurrió; es más, ante la previsible derrota en la consiguiente elección presidencial, y atendidos los también previsible resultados parlamentarios, dado el sistema binominal que aseguraba dos grandes mayorías posibles, el oficialismo, en palabras de Felipe Portales,

se encontraba no sólo frente a la segura pérdida de la Presidencia, sino además impedido de bloquear cualquier legislación ordinaria que propiciara la Concertación en el futuro.

Lo único que podía impedir la segura mayoría parlamentaria que le aguardaba a la Concertación era aprobar una reforma constitucional que modificara los artículos 65 y 68 de la Constitución. Pero esto necesitaba de una aprobación plebiscitaria, esto es, del concurso de la Concertación. Y los líderes de la Concertación aceptaron perder aquel inmerso poder que le brindaba la propia Carta Fundamental original del 80. Y lo que es aún más grave, desde el punto de vista democrático, dichas modificaciones se hicieron pasar completamente inadvertidas, dentro del conjunto de reformas constitucionales que se plebiscitaron en julio de 1989. Prácticamente nadie de los adherentes a la Concertación (ni tampoco los de la derecha, aunque para éstos se trataba de un beneficio) supo siquiera que con su voto estaba validando aquella enorme cesión de poder político a la futura oposición de derecha.

Las restantes reformas, dentro de un paquete de 54 disposiciones, a juicio de casi todos los involucrados no fueron decisivas. La Concertación, a instancias aparentemente de Andrés Allamand y RN, postergó sus principales demandas para un segundo *round* de eventuales negociaciones una vez en La Moneda. El siguiente diálogo relatado por Rafael Olaneda cuenta, en cambio, de cómo se llegó a este primer y, a la postre, único acuerdo en ese sentido hasta ahora:

Mitre, don Patricio —interpelaba Allamand a un Avwin casi seguro candidato y más que probable ganador en diciembre—, usted tiene que resolver aquí qué tipo de mandato quiere hacer. Si usted asume el gobierno sin el problema constitucional resuelto, se va a gastar los dos primeros años en una discusión inútil. Es mucho mejor entrar con una normativa menos perfecta, pero tener el problema medular superado, y no se olvide de que lo que a usted le aprieta, también le aprieta a Pinochet. Si, porque Pinochet tendrá la inmovilidad, pero también eso le obligará a no moverse de donde está.

En lo principal, se modificó la norma que prohibía la difusión de ciertas ideas reemplazándola por la que sanciona la instigación a la violencia o el procurar un régimen totalitario; se aumentó el número de senadores elegidos; se logró el empate en el Consejo de Seguridad Nacional entre Fuerzas Armadas y autoridades civiles; y se agilizó algo más el proceso de reforma constitucional eliminando la exigencia de dos Congresos sucesivos y reduciendo los quórum. Con todo, la Concertación concedió la eliminación de la facultad del Presidente de disolver la Cámara de Diputados una vez en su período presidencial; se hizo más difícil la injerencia del Ejecutivo en los nombramientos, ascensos y retiros del personal de las Fuerzas Armadas; se mantuvo el sistema electoral binominal que permite que, en cada circunscripción, uno de los bloques con una votación apenas de un tercio elija uno de los cupos parlamentarios al igual que la lista mayoritaria si ésta no logra los dos tercios del electorado; y se acordó, de modo excepcional, el primer período presidencial a cuatro años. Según

Genaro Arriagada, "esta negociación [...] no satisfizo a nadie". El 86% de los votantes, sin embargo, aprobó la propuesta "consensual" plebiscitada.

Se desconocen los otros términos específicos de la transacción entre dictadura y oposición, así como las presiones que presumiblemente incidieron a fin de crear un nuevo escenario en virtud del cual se le permitía a la oposición al régimen cogobernar el país, otorgándole a las Fuerzas Armadas y a sus partidarios civiles poderes extraordinarios adicionales a los ya existentes consagrados en la Constitución. Se trata, después de todo, del subcapítulo más nebuloso de la *eterna transición*. Sin ir más lejos, uno de sus principales cronistas -Ascarino Cavallo- con dos libros a su haber al respecto, evade lo verdaderamente "oculto", terminando el primero (*La historia oculta del régimen militar*) con el triunfo del NO en el plebiscito de 1988, mientras que el segundo (*La historia oculta de la transición*) comienza con la llegada de Aylwin a la Presidencia. A su vez, el análisis de Edgardo Boeninger, uno de los negociadores de 1988-89, apenas dedica un par de páginas al tema, limitándose únicamente a los puntos constitucionales plebiscitados en julio de 1989. Luego de la transacción a que se llegó con el gobierno y RN. Y eso que en los diecisiete meses entre el triunfo del NO y el inicio de los gobiernos concertacionistas, amén de las reformas constitucionales, el gobierno militar traspasó propiedad de diversa índole a las Fuerzas Armadas, privatizó cuantiosas empresas estatales, reasignó a funciones de Inteligencia del Ejército a numerosos agentes vinculados a la Central Nacional de Inteligencia (CNI) continuadora de la DINA, destruyó y desvió el curso normal de recaudo de archivos hacia organismos castrenses, y dictó leyes cruciales: por de pronto la de Codelco en virtud de la cual el 10% de las ventas al exterior fueron, de ahí en adelante, asignadas a las Fuerzas Armadas; la que prohíbe el aborto terapéutico; la Ley Orgánica Constitucional de Educación; la ley sobre administración de Justicia; la ley electoral; la del Banco Central; y una serie de otras "leyes secretas", que a lo largo del régimen estrictamente militar alcanzaron un total de 200. Durante el curso de este período, además, se allivió la deuda pendiente de grandes empresas periodísticas proclives a la dictadura, y, mediante incentivos pecuniarios por retiró anticipados, se reemplazó a nueve de un total de 16 miembros de la Corte Suprema. Todo lo anterior en un clima fuertemente cargado, y en que periódicamente Pinochet hacía declaraciones del siguiente tenor:

He meditado largas horas por el futuro de Chile. Tengo temores como los tienen todos, porque aquellos que aparecen hoy como mansas ovejas, como blancas palomas, llevan el odio y la infamia. Vamos a ver qué sucede después. Por eso digo, tengo mis aprensiones y por eso es que me quedo como comandante en jefe del Ejército. No para promover golpes o hacer gobiernos paralelos con el fin de molestar o no dejar gobernar [...] [Me quedo para resguardar la institucionalidad como me lo pide la Constitución. *El Mercurio*, 13 octubre 1989]

Yo no amenazo, no acostumbro a amenazar. Yo sólo advierto una vez: nadie me toca a nadie [...] El día que me toquen a uno de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho. *La Época*, 11 oct. 1989]

En definitiva, Andrés Allamand estaba en lo correcto: Pinochet no se movería así como así. La postura del régimen militar era, pues, clarísima. Al parecer, en el bando contrario, otro tanto, si atendemos al reconocimiento que casi diez años después hiciera Boeninger a propósito de las concesiones constitucionales plebiscitadas, comentario perfectamente extensible al ánimo general que desde entonces prima en círculos oficialistas de la Concertación: "lo fundamental era asegurar la transferencia del gobierno, aunque no se lograra la simultánea y equivalente transferencia del poder".

#### LA TRANSICIÓN CONSENSUADA CÍVICO-CASTRENSE

La gestión posterior de los gobiernos de la Concertación no ha hecho otra cosa que corroborar este propósito matriz. En concreto, el oficialismo concertacionista, a fin de cumplir su parte en los acuerdos, se ha empeñado todos estos años en desmovilizar a la ciudadanía. A modo de ejemplo, en esta última década del siglo, cosa curiosa en Chile, las grandes concentraciones públicas han tendido a desaparecer, salvo el caso novedoso de una jornada que se centró en el tema medioambiental, otras tantas que han versado sobre financiamiento universitario, el cierre de la mina de carbón de Lota, o, ya más convencionalmente, las convocadas a defender fuentes de trabajo y condiciones salariales por profesores, trabajadores de la salud pública y portuarios; y aún así, en cada uno de estos casos, alcanzando magnitudes y frecuencias mucho menores a las históricas. Ha influido, por cierto, el debilitamiento progresivo de las organizaciones sociales. Si en 1971 los trabajadores sindicalizados superaban un tercio de la fuerza de trabajo ocupada, en 1996 ésta sólo alcanzaba un 12,4%. Las organizaciones no gubernamentales, nacidas al alero de la Iglesia Católica y de la defensa de los derechos humanos, que en los años ochenta lograron autonomizarse y abarcar un espectro más amplio, por ejemplo las organizaciones populares para la sobrevivencia y paliar el desempleo, "más de 3.000 a comienzos de los noventa" según Gonzalo de la Maza, también han declinado rápidamente. Otro tanto ha ocurrido con los centros académicos alternativos, los que han sufrido la desaparición de sus miembros cooptados por puestos de gobierno, debiendo resistir con cada vez menos financiamiento externo, o teniendo que convertirse en consultoras privadas que operan con lógicas de mercado y fondos concursables.

La participación política, como también se ha entendido en Chile, nunca ha recuperado su tradicional protagonismo. Si bien los partidos han vuelto a funcionar, éstos siguen siendo extremadamente débiles, secuela de años de persecución militar, castigo social por su responsabilidad en las décadas de los sesenta y setenta, y, no menos clave, descreído alentado por un discurso antioligárquico y antipartidista que cruza todo el siglo. Igualmente gravitante ha sido el bajo perfil constitucional del Parlamento, el giro cupular asumido por la política chilena remontable a la lucha contra la dictadura, el consiguiente debilitamiento de las bases relegadas a un papel estrictamente electoral, y la